

**0042/2023**

El presente proyecto de Real Decreto tiene por objeto, según se expresa en la Exposición de Motivos y en su Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) la modificación de los textos normativos necesarios para reconocer a los Técnicos Superiores en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, habilitación bastante para ejercer como profesor de formación vial y profesor y/o director de escuela particular de conductores, superando el mecanismo actual y exclusivo de certificación de aptitud de formación vial, así como la modificación del Reglamento General de Conductores con el objeto de elevar el sistema de distribución de la capacidad de pruebas de aptitud y comportamiento en vías abiertas (sistema CAPA) al rango normativo reglamentario que le corresponde y dotar de regulación reglamentaria la organización de las pruebas de aptitud para la obtención de los permisos y licencias de conducción, y ello, entre otras circunstancias, como consecuencia de la anulación por la jurisdicción contencioso-administrativa (sentencia 361/2022, de 29 de julio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Procedimiento Ordinario 171/2021, anulando la instrucción 2020/C-136 de 29 de enero, por ausencia de rango normativo bastante).

En la cuestión objeto exclusivo de este Informe, la materia de protección de datos personales, el proyecto se limita a modificar nominativamente, en el apartado veinticuatro del artículo Uno, la mención que realiza la disposición adicional primera del Reglamento General de Escuelas Particulares de Conductores, aprobado por Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, hoy derogada, por la mención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Si bien ello es correcto no es sin embargo suficiente, por cuanto la regulación de los tratamientos de datos personales resulta en primer lugar, y, ante todo, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (el RGPD), mientras que la ley orgánica 3/2018 tan sólo adapta al ordenamiento jurídico español el citado Reglamento 2016/679, y completa sus disposiciones 8art. 1 LOPDGGDD).

Por eso, se considera necesario que se mencione al RGPD como norma esencial que regulará los tratamientos de datos derivados de la normativa que

se presenta a informa. Así, el apartado Veinticuatro del artículo Uno del proyecto quedaría redactado de la siguiente manera:

*La disposición adicional primera “Datos personales” queda redactada del siguiente modo:*

*“Disposición adicional primera. Tratamientos de Datos personales  
Los tratamientos de datos personales que resulten de las disposiciones contenidas en este reglamento se registrarán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.”*

Por otra parte, en el apartado Veintidós del artículo Uno se incorpora un nuevo artículo 48 ter, y en su regulación se menciona al RD 522/2006, de 28 de abril. Del mismo modo, se expresa que “de no constar el consentimiento [a la verificación del DNI] se deberá acompañar fotocopia del DNI o equivalente. Se sugiere que se revise este texto con el art. 28.2 de la ley 39/2015, pues establece un sistema aparentemente contrario, ya que el texto legal (posterior y de rango superior al RD 522/2006) es claro al establecer que *Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.* Se trata pues de que el interesado ha de expresar su negativa a que la Administración verifique los datos, no el consentimiento a que lo haga. Además, el derecho a no aportar documentos se extiende a todos los que obren en poder de la Administración, lo que incluirá al propio certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial o de Profesor de Escuelas Particulares de Conductores o al título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible (letra d) del apartado Veintidós).

Las mismas circunstancias concurren en el apartado Veinticinco del artículo Uno, que incorpora una nueva disposición Adicional Sexta cuyo apartado 2 requiere la aportación de determinados documentos, los cuales no deberían de ser aportados, obligatoriamente, por el interesado (apartados a) y b) al menos), puesto que se aplicaría el art. 28.2 de la ley 39/2015.

Obsérvese, por otra parte, que el apartado 2.a) de dicha Disposición Adicional Sexta (apartado Veinticinco del artículo Uno) tan sólo hace referencia a la posibilidad de “dar consentimiento” a la verificación de sus datos mediante el sistema de verificación de datos “si se está en posesión de un número de identidad extranjero”, lo cual se debe probablemente a una errata, al dejar fuera a los titulares de DNIs nacionales.